

# **CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO CIVIL: LA PROPIEDAD SOBRE BIENES INCORPORALES EN LA JURISPRUDENCIA**

Enrique Navarro Beltrán  
Profesor de Derecho Constitucional  
Universidad de Chile  
Director del Departamento de Derecho Público

## **SUMARIO:**

En el presente artículo se revisa la forma en que los tribunales han entendido la protección respecto de la propiedad sobre los bienes incorporales. Así, de acuerdo a cierta jurisprudencia ello importa tanto los derechos reales como los personales. Sin embargo, una tesis más amplia supone la tutela sobre cualquier derecho de contenido patrimonial, como es el caso de los derechos a la imagen, al cargo, al título, etc.

## **I. ANTECEDENTES**

Las fuentes normativas en materia de derecho de propiedad sobre los bienes incorporales las encontramos en el **Código Civil** y en la **carta fundamental**.

1. En efecto, el artículo 583 del Código Civil señala:

*"Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo"*

La Doctrina nacional, comentando la disposición, ha señalado que ella constituyó *"una novedad en la legislación positiva moderna porque en sus términos generales comprende la totalidad de las cosas incorporales; y, por lo tanto, no sólo a los derechos reales, de que pone el ejemplo del usufructo, sino los **derechos personales, los créditos de toda especie**, ya tengan por objeto de la prestación prometida, una cosa, ya un simple hecho o aun una abstención del deudor, **pueden ser objeto del derecho real de propiedad.**"*<sup>1</sup>

2. Por su parte, desde la perspectiva del Derecho Público, los antecedentes del actual artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 se remontan a las cartas de 1833 y de 1925.

- 2.1. El artículo **12 N° 5 de la Constitución de 1833** aseguraba a todos los habitantes de la República:

---

<sup>1</sup> Luis Claro Solar Derecho Civil Chileno y Comparado, Volumen III, pág. 328.

***"La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades...."***

Dicho artículo constituye el antecedente de las posteriores normas dictadas por los constituyentes.

Ni la doctrina ni la jurisprudencia de la época discurrieron mayormente en relación al derecho de propiedad sobre las cosas incorpóreas como consecuencia de la aludida normativa constitucional.

2.2. Por su parte, en la carta de 1925 se garantiza a los ciudadanos en su **artículo 10 N° 10:**

***"La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna"***.

Se dejó constancia en las Actas de la Comisión Constituyente en el sentido que se *"consideró por partes los distintos elementos de ese precepto; el significado de la palabra propiedades; el concepto de dominio y de otros derechos reales o personales sobre una cosa, mueble o raíz, corporal o incorpórea; la necesidad de que la garantía constitucional se extienda a todas..."*.<sup>2</sup>

Por lo demás, la doctrina también lo había entendido así al precisar que *"es evidente que a todas esas clases de bienes - cosas corporales e incorpóreas- se extiende la garantía constitucional cuando consagraba la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna"*<sup>3</sup>

Sin embargo, con posterioridad, el art. 10 N° 10 fue reformado en **1967** garantizándose ***"el derecho de propiedad en sus diversas especies"***, con lo cual se vinculaba la disposición con lo dispuesto en el art. 583 del Código Civil. En efecto, según señalara Pedro Jesús Rodríguez, Ministro de Justicia de la época *"la referencia a las diferentes especies de las propiedades tiene por objeto preciso esclarecer que ninguna quede desprovista de esta garantía, ni aún aquellas que por no recaer en cosas corporales, como el art. 582 del Código Civil lo establece en la definición del dominio, tiene por objeto bienes incorpóreas como los derechos personales, o intangibles como la propiedad literaria y otros análogos"*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Romualdo Silva Cortés, Sesión de 15 de mayo de 1925; cit. en Alejandro Guzmán Brito, Las cosas incorpóreas en la doctrina y en el derecho positivo, p. 236

<sup>3</sup> Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional, tomo 2, p. 275

<sup>4</sup> Sesión 92 de Senado, de 11 de abril de 1966.

La materia, sin embargo, había sido ya resuelta por nuestra jurisprudencia en una sentencia dictada en **1949**, con motivo de un recurso de inaplicabilidad, en el cual se señaló expresamente que **los derechos personales gozaban de la garantía del art. 10 N° 10 de la Constitución Política**.<sup>5</sup> Dicha doctrina reiterada y desarrollada con ocasión de los fallos dictados en la década del sesenta, especialmente en materia de incumplimiento de contrato de arrendamiento.<sup>6</sup>

3. El **derecho de propiedad fue una de las materias más estudiadas con motivo de la redacción de la Carta Fundamental de 1980**. Se le destinaron cerca de **cincuenta sesiones**, prácticamente un 10% del trabajo de la Comisión de Estudios, todo lo cual da cuenta de la especial preocupación que se tuvo en esta materia, habida cuenta de las experiencias pasadas en materia de infracción a los derechos de propiedad en sus diversas formas. El propósito de constituyente fue fortalecer al máximo esta garantía, tanto que le destina 3 disposiciones relativas: al **derecho a la propiedad** (artículo 19 N° 23), el **derecho de propiedad** (artículo 19 N° 24) y los **derechos de propiedad intelectual e industrial** (artículo 19 N° 25).

De la lectura de las actas de la Comisión de Estudio se desprende inequívocamente la voluntad del constituyente en orden a que las cosas incorporeales también se encontraran amparadas por el derecho de propiedad. Especialmente esclarecedora es la intervención del Presidente de la Comisión, señor Enrique Ortúzar, quien expresara su parecer en cuanto a estimar que: *"El hecho de que la Constitución asegure hoy día el derecho de propiedad en sus diversas especies, significa, sin duda, que está asegurando también la propiedad de los créditos, de los derechos y de las cosas incorporeales para ser más exactos, porque hay un precepto en el Código Civil que dice que sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad. Pero esta disposición -agrega el señor Presidente- podría desaparecer del Código Civil y no sería disparatada la interpretación si se dijera que el texto constitucional, al disponer que asegura la propiedad en sus diversas especies está garantizando sólo la propiedad minera, agraria, intelectual, etc., esto es, el derecho real de dominio propiamente tal. Entonces, al mantener la frase que el señor Guzmán considera innecesaria, se le da al inciso 1° la interpretación que realmente se quiere darle, y que resulta clara ahora, en virtud de lo que dispone el Código Civil, situación que podría no ser tan nítida si el día de mañana no existiera la disposición en el Código mencionado."*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Vid. Corte Suprema, 21 de diciembre de 1949, Revista de Derecho y Jurisprudencia (RDJ) 47, sec. 1ª., p.30: *"El artículo 583 del Código Civil reconoce la existencia de una especie de dominio o propiedad sobre las cosas incorporeales. Entre éstas se cuentan, conforme a la clasificación y definición contenidas en los artículos 576 y 578 del mismo Código, los derechos personales o créditos. Y es evidente que esta especie de propiedad goza también de las garantías de inviolabilidad consagrada en el número 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, porque este precepto ha establecido dicho privilegio, en forma explícita, a favor de todas las propiedades, sin distinción alguna"*.

<sup>6</sup> Corte Suprema, 24 de diciembre de 1968, RDJ 65, sec. 1ª., p. 392: *"La garantía constitucional del derecho de propiedad establecida en el N° 10 del artículo 10 de la Constitución Política, es amplia y comprende las diferentes formas que puede revestir el dominio, esto es, a las cosas corporales y a las incorporeales o créditos"*.

<sup>7</sup> CENC, sesión 116, 13.11.75, p. 12

Por lo demás, en el propio Informe Final de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución se señala que:

*"De manera explícita la garantía constitucional comprende, ahora, a los bienes incorporales, vale decir, a los derechos y acciones, dándole de este modo jerarquía constitucional al principio legal contenido en el art. 583 del Código Civil, según el cual sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad".<sup>8</sup>*

Esto último ha sido reiterado en diversos fallos del Tribunal Constitucional<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Informe de la CENC, en RCHD 8 (1981), p. 212

<sup>9</sup> Vid. sentencia 16 de Julio de 1982, Rol N°12, Considerando 11.

## II

### ALCANCE DE LA DISPOSICION CONSTITUCIONAL

#### 1. Tesis restrictiva

De acuerdo a una tesis restrictiva, la Constitución Política de la República al hablar de cosas incorpóreas se estaría refiriendo, tal como lo señala el artículo 576 del Código Civil, a los derechos reales o personales, siendo los primeros aquellos "que tenemos sobre una cosa sin respecto de determinada persona"<sup>10</sup> y los segundos aquellos "que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído la disposición correlativa"<sup>11</sup>

De esta forma, **se encontraría garantizado con el derecho de propiedad los derechos personales que emanan de los contratos libremente suscritos por las partes.**<sup>12</sup>

En tal sentido, se dejó constancia en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución que *"los derechos que emanan de los contratos (...) son bienes incorpóreos amparados por la garantía constitucional que asegura el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes y, en consecuencia, el titular de estos derechos no puede ser privado de los mismos, sino en virtud de expropiación en conformidad a las normas generales"*<sup>13</sup>

#### 2. Tesis amplia

Una segunda tesis es aquella según la cual la norma tendría un alcance más amplio que el de la simple protección de los derechos reales y personales, incluyendo **cualquier derecho de contenido patrimonial.**<sup>14</sup>

Dicha tesis tiene como antecedente principal la opinión vertida por don Alejandro Silva Bascuñán en el seno de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, al expresar que *"cuando se trata del derecho de propiedad, hay tendencia como se recordaba en la reunión pasada, a paralogizarse con el estatuto del derecho real de dominio sobre inmuebles. Entonces, como se está en ese espíritu, surge una serie de complicaciones que no existen cuando se concibe el derecho de propiedad como comprensivo de todo beneficio de carácter patrimonial, ya sea el derecho real de dominio sobre cosas muebles o*

---

<sup>10</sup> Artículo 577 del Código Civil

<sup>11</sup> Artículo 578 del Código Civil

<sup>12</sup> Vid. Alejandro Vergara Blanco, La propietarización de los derechos. Propiedad sobre los derechos, Informe Constitucional 322 (Junio, 1992)

<sup>13</sup> Informe Final de la CENC, ob. cit., p. 212

<sup>14</sup> Vid. Eduardo Soto Kloss, Propietarización de los derechos. No una "herejía" sino la "esencia" de lo que es derecho, Informe Constitucional 329 (Junio, 1992)

*inmuebles, sobre derechos reales y personales, sobre cosas corporales e incorporeales y sobre cualquier tipo de beneficios patrimoniales*"<sup>15</sup>

Como se verá, cierta jurisprudencia ha hecho suya esta tesis al hablar del **derecho a la función pública o a la estabilidad en el empleo**<sup>16</sup>, de los **derechos de los estudiantes a obtener un título profesional**<sup>17 18</sup> o de los **derechos adquiridos previsionales**.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Sesión 155, 2 de octubre de 1975, Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, pág.7

<sup>16</sup> Vid. en sentido afirmativo Corte Suprema, 24 de agosto de 1889, RDJ 86, sec. 5ª., p. 97: "*Que desde este punto de vista, el **derecho del trabajador a gozar de un empleo estable** mientras cumpla debidamente sus obligaciones funcionarias constituye una **especie de propiedad** sobre un bien incorporal, garantizado por el precepto constitucional ya señalado - artículo 19 N° 24- , de tal forma que el trabajador sólo puede ser privado de su empleo por los medios que la propia ley establece*". En sentido contrario, Pleno de la Corte Suprema, 15 de junio de 1988, RDJ 85, sec. 5ª., p. 107: "*Basta observar el contenido y alcance de dicho precepto -art. 19 N° 24- para concluir que la mencionada garantía no es aplicable, como lo pretenden los recurrentes a la propiedad del empleo, como quiera que éste no es un bien corporal ni incorporal de acuerdo con el concepto jurídico que de tales bienes la ley señala con absoluta claridad en los artículos 565, 566 y 576 del Código Civil. Es cierto que existen otra clase de bienes, sobre los cuales puede haber también propiedad, pero este derecho en tal caso, no queda protegido por la garantía contemplada en el N° 24, del artículo 19 y, por tal motivo, el constituyente debió designar otro precepto, que es el número 25 del mismo artículo, y que se refiere al derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales y artísticas que constituyen genéricamente la propiedad intelectual; y sobre creaciones industriales y comerciales que conforman en general la propiedad industrial, y dentro de ninguno de tales bienes puede quedar comprendido el **derecho al empleo o cargo público***". En similar sentido se ha expresado que "la propiedad o dominio protegido por la carta fundamental se refiere a un derecho de directo contenido patrimonial, transferible, transmisible, renunciabile y prescriptible, que puede recaer sobre cosas incorporales, pero no se extiende a cualquier beneficio, prerrogativa o interés que corresponda a un titular" (C. de Ap. de La Serena, 19 de mayo de 1997, RDJ 94 N° 2, p. 181).

<sup>17</sup> Sobre la materia, vid. en sentido afirmativo, Corte de Apelaciones de Concepción, 11 de octubre de 1984, RDJ 81, sec. 5ª., p. 276: "*Que unánimemente la jurisprudencia de nuestros tribunales ha aceptado como procedente invocar el derecho de propiedad sobre cosas incorporeales, desde que existe un precepto positivo, el artículo 583 del Código Civil, que dispone que sobre las cosas incorporeales existe una especie de propiedad (vid. Eduardo Soto Kloss, El recurso de protección, págs. 169 y siguientes). Es digno hacer notar que para este autor la propiedad sobre el título universitario se apoya tanto en un criterio civilista como en el ámbito publicista (pág. 172, ob. Cit.). No cabe duda, pues, que los recurrentes tienen derecho de propiedad sobre sus títulos profesionales*". Recientemente se ha sentenciado que contraviene la Constitución la cancelación de la matrícula "con abierta infracción a las normas del debido proceso de ley (...) afectando gravemente los derechos fundamentales de las recurrentes y, en lo pertinente, la garantía de su **derecho de propiedad que recae en este caso sobre un bien de carácter incorporal como lo es el derecho a concluir un proceso educativo que desarrolle al máximo de sus posibilidades su personalidad**" (C. de Apelaciones de Puerto Montt, 3 de enero de 2001, RDJ 98 N° 1, p. 81). Con la misma orientación se expresa la sentencia Rol N° 4243 de la C. Apelaciones de Santiago en Rec. Interpuesto por eliminación del recurrente de curso de post grado, en el "sentido que se accede al recurso intentado por haberse violado la ley del contrato al ponerle término unilateralmente, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente, derivado de dicho contrato, y que le permite exigir la prestación que le ha sido denegada". En sentido contrario se ha fallado que los derechos que confiere la calidad de estudiante no se encuentran amparados en el artículo 19 N° 24. Vid. Corte Suprema, 28 de julio de 1981, RDJ 78, sec. 5ª., p. 142: "*Que los derechos cuyo restablecimiento persigue el recurrente no son desde luego derechos reales, pues no están establecidos como tales por la ley; pero tampoco son derechos personales, puesto que no participan de los caracteres que de modo general corresponden a tales derechos: no representan en sí un valor pecuniario, no están*

### III

## JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE DERECHO DE PROPIEDAD

### 1. Interpretación restrictiva

Existe una abundante jurisprudencia relativa a los derechos sobre bienes incorporeales.

En tal sentido, como se analizará, especial protección se ha efectuado respecto de los derechos que emanan de los contratos y que han sido alterados por algunas de las partes. Así, la jurisprudencia ha puesto fin a actos unilaterales de las partes o de terceros que perturban el goce de derechos personales emanados de diversos contratos

#### 1.1. Contratos de arrendamiento

En esta materia, se ha estimado ilegal y arbitrario el **corte de suministro del servicio telefónico** efectuado por parte del arrendador en contra del arrendatario, por cuanto constituye un acto de autotutela ilícito por parte de aquél, que perturba el uso y goce de los derechos personales de este último.<sup>20</sup>

---

*dotados de acción para obtener su reconocimiento judicial, no son transferibles ni transmisibles ni son correlativos de prestaciones nacidas de alguna fuente de las obligaciones. En suma, **no pueden ser considerados como bienes incorporeales integrantes del derecho de propiedad**".*

<sup>18</sup> Cabe señalar que **algunos fallos han resuelto que la matrícula de un estudiante no otorga un derecho adquirido, sino una mera expectativa**; así, vid. Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de noviembre de 1986, RDJ 84, sec. 5ª., p.63: *"El sistema de matrícula de alumnos en cualquier forma de enseñanza, sea ella básica, media o universitaria, no produce derecho sino una mera expectativa que deriva del cumplimiento integral de las disposiciones reglamentarias, legales y constitucionales, a que el alumno se somete. Por lo tanto, se asimila, proporciones guardadas, a un contrato de adhesión, en la medida que la contraparte cumple íntegramente con su ejercicio legal y legítimo. De tal manera, no se adquiere un bien incorporal, sino que se otorga al alumno la posibilidad de obtener un grado académico determinado. Por lo tanto, no existe derecho incorporal, sino sólo un beneficio esperado, sujeto a una reglamentación determinada... De lo que se deduce que, contrariamente a lo sostenido, no se adquiere ni derecho real o personal por el solo hecho de ingresar a la Universidad"*.

<sup>19</sup> En materia de derechos adquiridos de carácter previsional se ha resuelto en Corte de Apelaciones, 28 de agosto de 1986, RDJ 83, sec. 5ª., p. 185: *"Que en efecto, sobre las cosas incorporeales existe una especie de propiedad y, de consiguiente, los beneficios de una pensión de jubilación o montepío de un sistema de seguridad social, incrementados con los reajustes ya devengados, integran el patrimonio del hombre y constituyen una parte muy importante del mismo que está destinado a proveer a su subsistencia, al pasar a integrar el sector pasivo, después de toda una vida de trabajo, y está protegido por la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 y por el recurso de protección conforme a lo que dispone el artículo 20 de la misma, atentando a lo expresado anteriormente"*. Más recientemente, C. de Ap. de Punta Arenas, 28 de diciembre de 2000, RDJ 97 N° 3, p. 278: *"La determinación tomada por la recurrida (INP) "en cuanto a privar de oficio al recurrente del goce de su pensión de vejez, la que en su oportunidad le fuera de manera formal y legalmente concedida, resulta ilegal y arbitraria y atenta contra el derecho de propiedad que sobre dicho beneficio detenta el jubilado..."*.

<sup>20</sup> Corte de Apelaciones de Arica, 23 de abril de 1986, RDJ. 83, sección 5ª, pág. 106

En el mismo sentido, se ha sentenciado que constituye una ilegalidad y arbitrariedad el **corte de suministro de energía eléctrica por parte del arrendador** en contra del arrendatario por supuesto no pago de rentas, caso en el cual el recurso de protección tiene como propósito mantener el statu quo vigente en el normal desarrollo y desenvolvimiento de los derechos de las partes, impidiendo que se hagan justicia por sí mismas a través de conductas de facto que alteren el orden jurídico establecido.<sup>21</sup>

En igual orden de ideas, se ha resuelto que es contrario al ordenamiento jurídico la actitud de una arrendadora que ha procedido a **cambiar la cerradura de una pieza de su propiedad** dada en arriendo existiendo un contrato de arrendamiento vigente, vulnerando ello el art. 19 N° 24 de la Constitución Política, estimando la Corte adecuado el recurso de protección, pues *"tan sólo se trata de **mantener el statu quo vigente** en el normal desarrollo y desenvolvimiento de los derechos de las partes, **impidiendo que éstas se hagan justicia por sí mismas a través de conductas de facto que alteren el orden jurídico establecido.**"*<sup>22</sup> En igual sentido, la Corte Suprema en fallo reciente ha reiterado su doctrina en cuanto a que el ordenamiento jurídico no ampara los actos de autotutela.<sup>23</sup>

Adicionalmente, la Corte de Apelaciones ha dado protección a un arrendatario de un local del Mercado de Concepción que recurre en contra del Alcalde de dicha ciudad al estimar que este último **mediante la dictación de un decreto pretende dejar sin efecto un contrato de arriendo** firmado entre las partes, aduciendo para ello supuestos errores en la persona que realmente se adjudicó el local, estimando que dicha conducta supone un acto ilegal y arbitrario que conculca el derecho de dominio de la recurrente sobre un bien incorporal, como es el derecho de arrendar el aludido local.<sup>24</sup>

Por último, puede citarse el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso interpuesto por un arrendatario en contra del arrendador, por diversos incumplimientos contractuales, entre ellos el corte del suministro eléctrico, reconociendo la existencia de un derecho de propiedad sobre el contrato de arrendamiento, el que se encuentra protegido por el art. 19 N° 24 de la Constitución.<sup>25</sup>

## 1.2. Contratos bancarios

En este punto, se ha resuelto que la **negativa de un socio administrador de repartir utilidades** que por estatuto corresponden a los socios, constituye un acto arbitrario e ilegal. En efecto, se ha fallado que *"la recurrida al negarse al pago de utilidades a que los recurrentes tienen derecho, ha cometido un acto arbitrario e ilegal, puesto que por definición legal la mira del contrato de sociedad es el logro y reparto de utilidades y como es un hecho reconocido por el administrador cuestionado que existen utilidades y se*

---

<sup>21</sup> Corte de Apelaciones de Antofagasta, 21 de agosto de 1991, FM 394, pág. 442

<sup>22</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 21 de diciembre de 1992, FM 410, pág. 990

<sup>23</sup> Corte Suprema, 28 de septiembre de 2000, Rol N° 2742-00

<sup>24</sup> Corte Suprema, 2 de julio de 1981, FM 272, pág. 266 y ss.

<sup>25</sup> Corte de Apelaciones de Valparaíso, 19 de agosto de 2002



*convino su reparto, fijándose incluso su monto, es evidente entonces que los socios han sido privados de algo que les pertenece, de su derecho de propiedad sobre las utilidades generadas, que lleva como contrapartida la obligación del recurrido de repartirlas*"<sup>26</sup>

En igual forma, se ha resuelto que la **negativa del Gerente General de una sociedad anónima cerrada de inscribir un traspaso de acciones, aduciendo pretextos que la ley no contempla, constituye un acto arbitrario e ilegal**<sup>27 28</sup>

Por su lado, se estima ilegal y arbitraria la conducta de un banco que habiendo suscrito un convenio de línea de crédito por un plazo pactado renovable modifica unilateralmente sus cláusulas e imputa el pago de la citada línea un saldo existente en la cuenta corriente bancaria del recurrente. De igual forma se estima **arbitraria la actitud de la sociedad bancaria** si se considera que dicha línea de crédito podía ser renovada, a menos que el banco le pusiera término por aviso escrito con una anticipación mínima de treinta días, lo que no ha ocurrido y si se tiene presente que el banco recurrido poseía un pagaré firmado que podía hacerlo efectivo llegado su vencimiento.<sup>29</sup>

Finalmente, en el mismo orden de materia, aunque en sentido diverso, la Corte de Apelaciones, con un voto de minoría, estimó **ajustado a la ley el cierre unilateral de una cuenta corriente** por parte de un banco y sin que exista causal determinada, ello en atención a que *"al proceder el banco a cerrar la cuenta corriente no hay duda de que obró en uso de las facultades reservadas al contratar, cabiendo precisar que el contrato de cuenta corriente bancaria, si bien se encuentra definido y reglamentado en nuestro derecho positivo, son los usos y costumbres bancarios los que le han dado una fisonomía peculiar; usos y costumbres que los bancos incorporan uniformemente a las condiciones generales del contrato. Tales normas hacen que la voluntad del banco se imponga al cliente, confiriéndole al contrato el carácter de contrato de adhesión, y también de contrato intuitu personae"* <sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Corte de Apelaciones de Antofagasta, 3 de mayo de 1989, RDJ 86, sec. 5ª., p.221

<sup>27</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 29 de agosto de 1991, FM 395,p.534

<sup>28</sup> Aunque no se trata estrictamente de lo mismo, ha habido ocasiones en que la jurisprudencia ha dado protección a la calidad de socio o asociado, tratándose de asociaciones o cuerpos asociativos, cuando aquellos han sido expulsados con infracción tanto a los estatutos de la misma asociación como al derecho sobre bienes incorpóreos *"en su calidad de socios de una organización determinada"* (Considerando 10º, Corte de Apelaciones de Antofagasta, 13 de octubre de 2000, RDJ 97 N° 3, p. 231).

<sup>29</sup> Corte Suprema, 2 de junio de 1991, RDJ 88, sec. 5ª., p.135

<sup>30</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de abril de 1992, FM 402, p. 213

### 1.3. Contratos de salud

En esta materia son múltiples los fallos dictados en los últimos años.<sup>31</sup>

Así, por ejemplo, se sancionó el actuar de una **Isapre** que **se negó a cubrir los costos médicos** de un afiliado por estimar que se trataba de enfermedades preexistentes. En la parte atinente, se resuelve que *"el recurrente tiene derecho de dominio sobre el bien incorporal constituido por las bonificaciones adeudadas las que no fueron solucionadas por una decisión unilateral de la Isapre (...) que infringe abiertamente la ley del contrato y que, por ende debe calificarse de ilegal"*.<sup>32</sup>

Del mismo modo, se estimó que **no es lícito dejar sin efecto contrato por eventuales enfermedades preexistentes**<sup>33</sup>, que la Isapre está **obligada a pagar atención hospitalaria**<sup>34</sup>, o que la negativa de la institución de salud previsional para bonificar las prestaciones de salud, conforme al plan contratado, importa una privación en su derecho de propiedad<sup>35</sup> y, por último, que la **facultad revisora de la Isapre debe entenderse condicionada en su esencia a un cambio efectivo del costo de las prestaciones médicas en razón de una alteración substancial de sus costos** y no por un simple aumento, debido a fenómenos inflacionarios<sup>36</sup>.

Finalmente, cabe señalar que en materia de seguros, se ha señalado por nuestros tribunales que "no es facultativo para la Compañía de Seguros pagar o no la indemnización correspondiente, sino que tiene la obligación de hacerlo mientras no se declare nulo el contrato de seguros, ya que permitir lo contrario constituiría un acto de justicia privada, que es contrario a las normas mínimas del derecho"<sup>37</sup>

---

<sup>31</sup> C. Apelaciones de Talca Rol 59392, confirmada por C. Suprema con fecha 15 de enero de 2002; C. Apelaciones de Santiago Rol 3441-02, confirmada por la C. Suprema con fecha 16 de octubre de 2002; C. Apelaciones de Santiago Rol 6422-01, confirmada por la C. Suprema con fecha 15 de abril de 2002.

<sup>32</sup> Corte Suprema, 16 de agosto de 1990, FM 381, p. 430

<sup>33</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de abril de 2002. Confirmado C. Suprema, 7 de mayo de 2002.

<sup>34</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de mayo de 2002. Confirmado C. Suprema, 11 de junio de 2002

<sup>35</sup> Corte de Apelaciones de Concepción, 28 de mayo de 2002. Confirmado C. Suprema, 11 de julio de 2002, FM 500, p. 1544

<sup>36</sup> Corte Suprema, 30 de marzo de 2000, FM 496, p. 234

<sup>37</sup> Corte de Apelaciones de Concepción, 13 de marzo de 2001. Confirmado por la C. Suprema, 3 de abril de 2001

#### 1.4. Contratos de servicios

En esta materia cabe citar el recurso de protección dirigido en contra de la Empresa de Ferrocarriles del Estado por haber puesto término **al contrato de transporte** suscrito con un particular para el transporte de ganados y productos refrigerados sin haber respetado el procedimiento previsto en el contrato, violándose por tanto la ley del contrato y significando ello una privación o perturbación a derechos personales amparado con el derecho de dominio. Se resuelve que **la resolución que en forma unilateral pone término al contrato de concesión priva a la recurrente del legítimo ejercicio de los derechos que derivan de dicha convención**<sup>38</sup>

En otro caso se sentencia que la recurrente -concesionaria de servicio público telefónico- *"incorporó a su patrimonio y adquirió la propiedad para operar, desarrollar y comercializar 10.000 líneas, de suerte que la recurrida al resolver la extinción de la concesión de 5.000 de ellas (...) mediante acto que ha resultado contrario a derecho, ha irrogado a la recurrente privación ilegal y arbitraria del legítimo ejercicio que le asiste sobre los derechos emanados de esa concesión, vulnerando así la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la carta fundamental"*, dejándose sin efecto el acto administrativo que había declarado extinguido y caducada la ampliación de la concesión, ordenándose a la autoridad que se pronuncie sobre la solicitud de modificación de concesión presentada por la recurrente.<sup>39</sup>

En otro recurso de protección se **recurre en contra de un Alcalde por haber caducado una concesión sobre avisaje publicitario en las calles de dicha comuna invocando una causal que precisamente se había producido por responsabilidad de la autoridad, dejándose en definitiva sin efecto el decreto que caducaba la concesión**. El fallo señala que el artículo 583 del Código Civil indica *"que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad y cita por vía de ejemplo la propiedad que tiene el usufructuario de su derecho de usufructo. Siendo esta cita sólo ilustrativa y no taxativa, no hay inconveniente, entonces, para estimar que el derecho que se tiene sobre una concesión municipal está amparado en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, máxime si se considera que el artículo 602 del citado Código dispone que sobre las obras que se construyan en sitios de propiedad nacional, con el permiso de la autoridad competente, no tienen los particulares que lo han obtenido, sino el uso y goce de ellos y no la propiedad del suelo"*<sup>40</sup>

Del mismo modo, se ha estimado que la autoridad edilicia y su Consejo Municipal incurren en un acto arbitrario al caducar en forma anticipada y sin causa legal la concesión de explotación de parquímetros otorgada al recurrente.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 27 de abril de 1990, Cit. en Andrés Jana L., Recurso de Protección y Contratos, p.197

<sup>39</sup> Corte Suprema, 29 de enero de 1991, RDJ 88, sec. 5ª., p.51

<sup>40</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de octubre de 1992, FM 408, p. 831

<sup>41</sup> Corte de Apelaciones de San Miguel, 28 de junio de 2000

Sobre este mismo tópico se ha resuelto que la atribución del Municipio de poner término unilateral a la concesión otorgada a la recurrente, en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones, calificado por la misma autoridad, constituye una de las denominadas ‘cláusulas exorbitantes’ que encierran los contratos administrativos y que recoge el interés público que orienta su celebración, interpretación y ejecución, alterando el principio de igualdad que gobierna las convenciones que suscriben los particulares, sujetas al derecho común. Sin embargo, la posterior suscripción de un contrato de transacción, con el concesionario, importó para el Municipio resignar el ejercicio de su potestad unilateral de poner término a la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario. Así, la decisión de la autoridad de poner término a la concesión, a despecho de la referida transacción, conforma un acto que ilegítima y arbitrariamente ha efectuado el ejercicio del derecho que asegura el recurrente el N° 24 del art. 19 de la Constitución Política en su calidad de titular de la mencionada concesión.<sup>42</sup>

1.5 Actuaciones de la autoridad que pretende desconocer contratos de particulares  
Sobre esta materia cabe señalar diversos precedentes.

Así, se ha señalado que es **ilegal y arbitraria la conducta de la autoridad tributaria que ha desconocido un contrato de transacción** suscrito con un particular y que sólo puede ser dejado sin efecto por mutuo consentimiento o por causas legales.

*"El posible error en que haya podido incurrir la autoridad administrativa al celebrar una transacción no justifica de manera alguna el proceder a vulnerar una situación jurídica ya adquirida por el solo ministerio de la ley, ya que el marco legal para proponer dicha alegación no puede ser otro que el procedimiento jurisdiccional idóneo para obtener su nulidad o rescisión. Al optar el agente administrativo por desconocer unilateralmente una transacción legalmente acordada, en vez de acudir a la vía jurisdiccional, ha obrado al margen del derecho, de manera esencialmente fáctica y, por tanto, antijurídica, perturbando el ejercicio legítimo del derecho de propiedad del recurrente afectado".<sup>43</sup>*

En otro orden de materias, se ha acogido un recurso de protección interpuesto por un particular frente a la **negativa del Secretario Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de autorizar la remesa de capital al exterior**, infringiéndose de esta manera el contrato ley suscrito entre el particular y el Estado de Chile. En efecto, se sostuvo que *"debe tenerse en consideración que el citado precepto constitucional garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, alusión esta última que permite encuadrar en ella el **derecho nacido para la empresa recurrente, en virtud del contrato que pactó con el Estado de Chile, a devolver a su país el capital aportado, derecho que en el caso propuesto (....) se consolidó en su peculio al ceñirse su petición de devolución de capital, en la parte de él que se encuentra en la situación prevista en el Estatuto de la Inversión Extranjera y en el contrato, a la condición mínima de permanencia en el país, de manera que al no permitirse por el***

<sup>42</sup> Corte Suprema, 2 de enero de 2002, FM 498, p. 723

<sup>43</sup> Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 11 de mayo de 1985, RDJ 82, sec. 5ª., p.217

*Comité esa devolución, aduciendo requisitos ajenos a esas normas y estatuidas en forma unilateral respecto del contrato pactado, ha infringido esa autoridad el derecho invocado lo que hace procedente el recurso”<sup>44</sup>*

Finalmente, en un recurso presentado por una empresa distribuidora de electricidad en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, **se deja sin efecto el acto administrativo que había ordenado modificar el contrato suscrito entre la recurrente y otra empresa, por estimarse que arbitraria e ilegalmente se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre los derechos incorporales del recurrente para efectuar la restitución de los aportes financieros reembolsables.** Se estima que el organismo contralor sólo puede ejercer sus facultades cuando surgen discrepancias entre las partes en relación a la forma de efectuar los aportes reembolsables, antes que el contrato se perfeccione y previo reclamo del aportante en el sentido que el mecanismo elegido por la empresa concesionaria no signifique al aportante un reembolso real<sup>45</sup>

## 2. **Infracción a otro tipo de “derechos” de contenido patrimonial**

Sin embargo, como se ha indicado, ciertos fallos también han tutelado todo tipo de derechos de contenido patrimonial. Al respecto se ha sostenido, por ejemplo, en materia de propiedad sobre el título que “la recurrente tiene una propiedad incorporal sobre los logros académicos obtenidos en dicho establecimiento (recurrido), lo que la habilita para solicitar los expresados certificados para presentarlos en otro plantel educacional”. Y que “en cuanto al previo pago de los aranceles adeudados por la recurrente al establecimiento antes mencionado, no puede perturbar el derecho a que se ha hecho referencia en el fundamento anterior, toda vez que tal condicionamiento no tiene base en el ámbito jurídico”<sup>46</sup>

Con respecto al propiedad sobre el cargo, la Corte de Apelaciones de Santiago en recurso de protección interpuesto por funcionaria municipal a contrata con respecto de quien se puso término anticipado de sus funciones, estimó “Que el asunto a dilucidar consiste en determinar si el término de las funciones que desempeñaba la recurrente en la I. Municipalidad de Maipú y que le fuera practicado por el director de Administración y Finanzas a contar del 07 de noviembre de 2002, es o no un acto arbitrario o ilegal y si ello le ha significado una privación a su derecho de propiedad a la estabilidad en el empleo, en el cargo a contrata y sobre sus contraprestaciones pecuniarias”. Posteriormente señala al acoger el recurso “que al actuar la recurrida en la forma antes señalada, asimismo se ha violado el derecho de propiedad de la afectada sobre el cargo a contrata que tenía en la I. Municipalidad de Maipú”.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de mayo de 1986, RDJ 83, sec 5ª., p.90

<sup>45</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, 10 de noviembre de 1993, Rol N° 2527-93, cit. en Andrés Jana L., Recurso de Protección y Contratos, p. 228

<sup>46</sup> Corte de Apelaciones de Talca Rol 60845, confirmado por la Corte Suprema con fecha 09 de mayo de 2002.

<sup>47</sup> Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 6512-02, confirmado por la Corte Suprema con fecha 05 de febrero de 2003.

Con similares argumentos la Corte de Apelaciones de Concepción en recurso de protección interpuesto por funcionaria pública de planta, cuyo cargo fue declarado en vacancia por salud incompatible con el desempeño del mismo, señala, citando a la Excm. Corte Suprema en rol 1035-98, “que el derecho a la función se refiere a permanecer en el empleo a que se ha accedido legalmente, mientras no medie una causal legal de expiración de funciones; de modo que la garantía para el funcionario consiste en que la cesación de sus labores no queda entregada a la discrecionalidad de la administración, sino que a la determinación de la ley, y en este sentido es un derecho incorporal que la ley otorga, comprendido entre los que garantiza el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República; la propiedad no recae sobre el cargo o empleo, sino sobre el derecho a permanecer en él en tanto no se produzca una causal legal para la cesación de funciones”. Luego en el mismo fallo se estima “que las reflexiones anteriores conducen a estos sentenciadores a concluir que la declaración de vacancia del cargo que desempeñaba doña Ruth Angélica Muñoz Arriagada constituye un acto arbitrario del recurrido, que ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente sobre la permanencia en su función, por lo que el recurso de protección debe ser acogido”.<sup>48</sup>

Finalmente, es del caso señalar que en el año recién pasado encontramos dos temas interesantes en materia de propiedad sobre derechos.

Así, en materia de derecho a la imagen, se estimó vulneratorio a la propiedad la utilización de la imagen de un deportista por parte de una empresa sin su autorización.<sup>49</sup>

Por último, en materia regulatoria, se menciona como derecho incorporado al patrimonio de las empresas sanitarias la circunstancia que las controversias suscitadas con motivo de los procesos tarifarios sean resueltos por las comisiones arbitrales establecidos al efecto.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Corte de Apelaciones de Concepción Rol N° 697-03. Confirmado por la Corte Suprema con fecha 13 de agosto de 2003

<sup>49</sup> Corte Suprema, Rol N° 502-04, 22 de diciembre de 2004

<sup>50</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3512-04, 24 de septiembre de 2004. Confirmado por Corte Suprema, Rol N° 4600-04, 15 de noviembre de 2004

#### IV CONCLUSIONES

1. El artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República protege el **derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales.**
2. Dentro de estos últimos se encuentran los derechos reales y los derechos personales; razón por la cual **los derechos personales que emanan de los contratos se encuentran amparados con la garantía del derecho de dominio.**
3. **La Doctrina nacional se encuentra dividida en materia de interpretación del artículo 19 N° 24 de la carta fundamental.** Para algunos sólo se refiere al **derecho de propiedad sobre las cosas corporales e incorporeales** y para otros, en cambio, **incluye todo tipo de derechos que tengan un contenido de carácter patrimonial.**
4. Los tribunales han acogido acciones tanto por infracciones al derecho de propiedad sobre bienes corporales como incorporeales. En este último caso, fundamentalmente evitando la autotutela de una de las partes o cualquier otro tipo de situaciones que afecten el normal desenvolvimiento de las relaciones contractuales.
5. Así, en general, las Cortes de Apelaciones **han resguardado los derechos que emanan de los contratos cuando se trata de infracciones graves** a objeto de mantener el statu quo de las partes y con el propósito de que la materia de fondo sea discutida en los tribunales a través de las acciones ordinarias.
6. De esta forma, el recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinarias, sino que, por el contrario, **su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero -sea autoridad o privado- pretenda aplicar justicia por sí mismo.**
7. Adicionalmente se ha amparado el derecho de **propiedad sobre derechos de contenido patrimonial**, como es el caso del derecho a la imagen, al cargo, al título e incluso a una comisión.